

# Crónica del mes

*Enero-febrero*

Los salvadoreños iniciaron el año 2004 disponiéndose a escoger nuevo presidente y vicepresidente. Atrás quedaban otros asuntos que, como el TLC con Estados Unidos, ocuparon la atención de los medios masivos hasta finales del 2003. Este último pasó a su fase política, en el que las diplomacias de los países firmantes desplegarán sus estrategias para convencer a los respectivos congresos y asambleas nacionales para la ratificación del CAFTA. El nuevo año empezaba, pues, con el objetivo puesto en los comicios del 21 de marzo, de cuyos resultados saldrían los gobernantes que gestionarán el país durante los próximos cinco años. La denodada lucha por agenciarse el apoyo del electorado llevó a los dos principales partidos políticos de El Salvador, ARENA y el FMLN, a agudizar sus discursos y a olvidarse del abordaje serio de los problemas más urgentes del país. Contrario a lo esperado, la expectativa generada por sendos informes presentados al final del año —que, de una u otra manera, señalaban los principales desafíos del país—, acabó dando paso a las acusaciones mutuas entre los candidatos en la contienda. Los dirigentes de ambos partidos, incluidos sus candidatos, se enfrascaron paulatinamente en una campaña sucia en la que se dejaron escuchar frases y acusaciones de antaño. El candidato oficial, Antonio Saca, aprovechó el clima anticomunista nuevamente activado en los medios para lanzar ataques arteros en contra de su principal contendiente, Schafik Handal, quien a su vez fue dejando la imagen de moderación recomendada por sus asesores y volvió a mostrar su talante irascible ante las cámaras.

El anacronismo de los discursos fue acompañado por los episodios de violencia electoral registrados desde que inició oficialmente la campaña y que ha enfrentado, en su mayoría, a militantes y simpatizantes areneros y efemelenistas. Así las co-

sas, la cerrada disputa entre prácticamente dos fuerzas políticas por la presidencia de la República marcó la coyuntura previa a los comicios de marzo. En consecuencia, los meses de enero y febrero, como preludio del evento electoral, estuvieron condicionados sobremanera por este último. De acuerdo con los sondeos de opinión pública, el FMLN tendió a disminuir la brecha que le separa históricamente de ARENA en las elecciones presidenciales, aunque, al cierre de febrero, otros sondeos coincidían en señalar un retroceso de la izquierda respecto de su contrincante. Una de las primeras encuestas presentadas en el año —cuyos resultados fueron presentados el 12 de enero—, la de la Universidad Francisco Gavidia, otorgaba a ARENA 4.5 puntos porcentuales arriba del FMLN en las intenciones de voto para las presidenciales de marzo. Días más tarde, el 20, la Universidad Tecnológica, confirmaba la tendencia, separando por 4.7 puntos porcentuales (37.9 frente al 33.1 por ciento) al partido oficial del FMLN.

Al calor de la campaña, un significativo evento quedó relegado a un plano secundario: el duodécimo aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Este evento, sin duda de mucha importancia para la vida política del país en el último decenio, pasó casi inadvertido para las autoridades del partido oficial. Además, pocos medios de comunicación presentaron alguna atención a los históricos documentos. Ni mucho menos se habló de la necesidad de volver sobre ciertos tópicos aun pendientes y, sin embargo, previstos en el documento firmado en el castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. La actitud del gobierno y del partido oficial respecto de la conmemoración de los 12 años de la firma de la paz contrastó con la ceremonia organizada por el partido de izquierda. El FMLN reunió a representantes de gobiernos extranjeros —entre ellos el

embajador de México, país que tuvo mucho protagonismo en las negociaciones por la paz—, y otros personajes nacionales. Su candidato presidencial, Schafik Handal, destacó los logros de la paz y la necesidad de seguir avanzando en la solución de los problemas más acuciantes que enfrentan actualmente los salvadoreños. Pero respecto del silencio gubernamental sobre el aniversario de la firma de la paz, hay una especie de esquizofrenia política que conviene poner al descubierto. Por un lado, se puede recordar la declaración del presidente Francisco Flores en 2002, en Perquín, en torno al supuesto fin de la transición. El mandatario dijo que era tiempo de pasar la página de la transición y que lo más importante para el país era fijarse en la juventud y la niñez de hoy, cuya educación y bienestar hay que asegurar. Entonces, escuchado en este argumento del pretendido fin de la transición se puede explicar el silencio oficial.

Sin embargo —en ello se encuentra el tema de la esquizofrenia política de la que se hizo mención más arriba—, los mismos sectores areneros no han tenido empacho en revivir, durante la campaña electoral, los sangrientos años de la guerra cuando se trata de señalar a los ex guerrilleros como responsables de la destrucción del país. Así, por un lado se ha evocado el fin de la transición y la necesidad de olvidar el pasado, mientras que, por otro lado, en cuanta oportunidad se ha presentado, se ha machacado la responsabilidad de la izquierda en la destrucción del país durante los años de la locura. Se ha pasado alegremente sobre la mayor responsabilidad de los cuerpos de seguridad estatal en los casos más aberrantes de violación a los derechos humanos, para enfatizar la responsabilidad de un único sector. De esta manera, cierto sector de la derecha se ha seguido presentando —sin una pizca de vergüenza— como el principal garante de la democracia, de los derechos humanos y del bienestar económico de los salvadoreños.

La amnesia histórica es una tara profunda de la que siempre ha padecido la sociedad salvadoreña. Se suele recalcar el desconocimiento de la historia del país por parte de sus habitantes, la falta de una cultura que propicie el conocimiento de los hechos más relevantes de la vida nacional como manifestaciones de este flagelo del olvido. Consecuente con ello, ciertos sectores suelen manejar a su antojo la realidad pasada, desdibujando todos los hechos para ajustarlos a los intereses de los más poderosos. Hay suficientes elementos que hacen sospechar que

la estrategia de silenciar el aniversario de la firma de la paz obedece, a la vez, a la doble estrategia de olvidar para mejor manipular. Lo importante no es tanto que se haya terminado, por la vía del diálogo y de la negociación, con el conflicto armado, sino que estos sectores siguen viviendo y prediciendo su resentimiento y la ilusión, una vez soñada, de aplastar a los revoltosos comunistas. Así, los acuerdos de paz no se asumen como un logro del país, sino que se dejan, con un cierto desdén, a que sean reivindicados por la izquierda. Ésta encuentra en los acuerdos su único asidero con la historia política del país.

Contrario a lo ocurrido con este evento, los medios informativos salvadoreños siguieron dando publicidad al Plan Mano Dura y la Ley Antimaras, maquinaciones del Órgano Ejecutivo en contra de las maras, pese a que esas iniciativas llevaron a enfrentar al presidente Flores con el Órgano Judicial. En efecto, desde que Francisco Flores inició su cruzada antimaras, en julio de 2003, ha gozado del beneplácito y de la cobertura de unos poderosos medios que a diario reseñan los supuestos logros del plan policial y critican a quienes se han opuesto a las iniciativas del Ejecutivo. En la pugna surgida entre Flores y los jueces, a raíz del cuestionado apego constitucional de la Ley Antimaras, cierto sector de la prensa no ha dudado en expresar su apoyo al mandatario, quien ha apelado al temor de los salvadoreños ante los pandilleros para culpabilizar a los aplicadores de justicia que se han negado a emplear una ley que, a todas luces, riñe con la Constitución.

De acuerdo con una publicación de *La Prensa Gráfica*, del 3 de enero, un juez de menores de Soyapango, por ejemplo, había ordenado dejar en libertad a 95 pandilleros desde octubre del año pasado, tras haber declarado “inaplicable” la normativa antimaras. De hecho, se leía en la nota periodística, ni la Fiscalía General ni la Policía Nacional Civil habían podido llevar a juicio a los cientos de capturados en ese municipio desde el 26 de octubre de 2003, apenas trece días después de que la ley entró en vigencia. No obstante la oposición de los jueces, el Ejecutivo se empeñó en proponer la reforma de la Ley Antimaras, a fin de convertirla en una ley de carácter permanente.

En esa línea, desde la primera semana del año, la comisión designada por Flores para dar seguimiento a la aplicación de la Ley Antimaras empujó a la Corte Suprema de Justicia para que ésta

acelerara la designación de jueces especiales que juzguen a los pandilleros capturados en el marco del Plan Mano Dura. Mientras tanto, los mismos magistrados de la Corte coincidían en que tanto la Ley Antimaras como la propuesta de reforma anunciada por el Ejecutivo riñen con la Constitución. "Solo nos apegamos al marco legal, pero hay disposición a resolver el problema si se buscan las verdaderas causas de la violencia", comentó el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, cita-do por un matutino nacional, el 9 de enero.

La pugna entre Francisco Flores y el Órgano Judicial se mantuvo a lo largo del mes, mientras aquel lanzaba serias acusaciones en contra de los jueces por no plegarse a sus disposiciones. En esa tónica, el 30 de enero, Flores criticó a otra jueza capitalina por dejar libres a siete pandilleros capturados por la Policía. El mandatario dijo no entender por qué los jueces siguen "inventando tecnicismos y argucias legales para sacar de la cárcel a los mareros"; además, atacando a jueces y a los partidos políticos de oposición, no desaprovechó la oportunidad para demandar la creación de los tribunales especiales. Flores aseguró que la Policía había capturado a unos 8 mil 500 pandilleros desde julio pasado, pero que los jueces solo han dejado en la cárcel a 425. A las críticas del mandatario se sumó el director general de la Policía, Ricardo Meneses, quien consideró que declarar inocentes a los pandilleros capturados es "inconcebible".

Con todo, Flores no solo se enfrentó a los jueces. La pugna dentro del Estado salvadoreño alcanzó todavía a las municipalidades aglutinadas en COMURES, organismo que cabildea, junto con las fracciones opositoras en la Asamblea Legislativa, el aumento presupuestario a las 262 alcaldías del país. El día 9 de enero, la gremial municipal giró un comunicado público en el que exhortaba al Órgano Ejecutivo y a la fracción de ARENA en la Asamblea para "concertar y apoyar una mayor inversión social en las comunidades, a través de las municipalidades". El llamado de COMURES se dirigía para que la bancada oficial diera el apoyo al aumento del 2 por ciento al Fondo de Desarrollo Social de las Municipalidades (FODES), que desde la segunda mitad del año pasado mantuvo enfrentados a la oposición legislativa con el presidente de la República.

El 22 de enero, el presidente Flores encaró a los alcaldes reunidos en un congreso de la gremial, y les dio tres razones que, a su juicio, le impiden

avalar el aumento del 2 por ciento a las alcaldías. Según la lógica del mandatario, los pagos de la reconstrucción posterremotos, el pago de la deuda previsional y los pagos de reconstrucción después de la guerra ejercerán tal presión en las arcas del Estado que le impedirán aumentar los recursos a las alcaldías. Con ello, la moción de COMURES quedó nuevamente aplazada entre las disputas dentro del Estado. De este modo, la dinámica política nacional estuvo marcada durante el primer mes del año por la intensidad de la campaña electoral, así como por la tensión generada por el enfrentamiento entre Flores y los jueces de la República, quienes se han negado a plegarse a la iniciativa antimaras del Ejecutivo.

En materia social y económica, únicamente el inicio del nuevo año escolar, el repunte de las epidemias que año tras año afectan a los salvadoreños y la discusión legislativa en torno a un presupuesto general del Estado aún no aprobado marcaron la tónica a lo largo de enero. Así, a inicios del mes, el Ministerio de Educación estuvo en la mira de los medios debido a la entrega de los bonos de gratuidad en las escuelas públicas, que sustituirían la cancelación de las llamadas cuotas voluntarias por parte de los padres de familia. El día 8, el ministro de Educación, Rolando Marín, expresó que no podía asegurar que el bono cubrirá "todas las necesidades que puedan tener [las escuelas], pero tampoco lo hacían con lo que recaudaban de las cuotas voluntarias". Al día siguiente, el matutino *La Prensa Gráfica* reveló que al menos 114 escuelas públicas habían sido denunciadas ante el Ministerio de Educación por cobrar cuotas voluntarias a los padres de familia, pese a la prohibición de las mismas. El día 12, fue inaugurado el año escolar con dificultades en algunos centros escolares de la red pública, debido a que no alcanzaron a cubrir las plazas necesarias de maestros; es el caso de un centro escolar en Soyapango, donde los 480 alumnos escritos son atendidos por dos maestras únicamente. Ese día, un total de 5 mil 25 escuelas públicas en el país abrieron sus puertas para recibir al menos a 1 millón 731 mil alumnos, cifra de alumnos inscritos en 2003. Para el presente año, las autoridades de educación estimaron que el censo aumentará en unos 60 mil nuevos estudiantes, debido a que la eliminación de las cuotas voluntarias les posibilitaría el acceso gratuito a las escuelas.

Como quiera que sea, el año escolar inició habiendo superado, en gran parte, la reconstrucción

de la infraestructura dañada por los terremotos de 2001, pero con deudas aún pendientes en materia de calidad de la enseñanza, cobertura y equidad. En materia de salud, las autoridades del ramo se mantenían en alerta debido a la incidencia de las epidemias que coinciden con el inicio del año. De éstas, las infecciones respiratorias, sin duda alguna, han minado la salud de los salvadoreños, especialmente de los menores de edad. Por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 28 del mismo mes, el Ministerio de Salud reportaba un total de 120 mil 392 casos de salvadoreños atendidos por catarros y otras afecciones. No obstante, según el ministro de esa cartera, Herbert Betancourt, las cifras están "en el rango normal", descartando un repunte significativo de casos.

En lo tocante a la dinámica económica, mientras el Banco Central de Reserva (BCR) anunciaba que el flujo de remesas había llegado a su máximo histórico, los diputados de la Asamblea Legislativa discutían el Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2004, entre acusaciones mutuas de las fracciones de ARENA y el FMLN por retrasar la aprobación del mismo. Estos dos temas, junto con la negociación política del CAFTA, en menor medida, ocuparon la atención de los medios informativos desde el inicio del año. En el primer punto, a saber, el repunte de las remesas, el Banco Central de Reserva informaba que el monto ascendió a 2 105 millones de dólares al cierre del año, experimentando el más alto nivel en la historia. Al cierre del 2002, esa cantidad había llegado a 1 935 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8.8 por ciento en el año recién concluido. La cifra es importante, tomando en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones más recientes de Cancillería salvadoreña, unos 2.7 millones de salvadoreños residen en el exterior, de los cuales 2.5 millones residirían legal o ilegalmente en Estados Unidos.

En el segundo asunto, es decir, la discusión en torno al presupuesto general de gastos del Estado, las dos fracciones mayoritarias se acusaban mutuamente de postergar la aprobación del anteproyecto presentado por el Ejecutivo desde noviembre del año pasado. En ese sentido, hasta la primera semana de enero, las fracciones legislativas de oposición mantenían sus demandas para avalar la propuesta del Ministerio de Hacienda. Tanto las bancadas del FMLN como del PCN, PDC y CDU coincidían en aumentar el presupuesto a las alcal-

días, el Ministerio Público y la Universidad de El Salvador, así como la eliminación de los cobros en los hospitales nacionales y la revalorización de las pensiones.

Más tarde, las peticiones se redujeron a dos: el aumento a las municipalidades y el refuerzo del presupuesto de la Universidad de El Salvador. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Juan José Daboub, aseguró que los diputados no podían modificar su anteproyecto debido a que la Constitución se los prohíbe, manteniendo una postura rígida ante las peticiones de la oposición. "Me parece irresponsable de parte del ministro de Hacienda y del presidente de la República tan alto nivel de necesidad", comentaba el legislador del CDU, Jorge Villacorta, al valorar la rigidez del Ejecutivo. Desde diversos sectores nacionales se manifestaba preocupación por la tardanza de los legisladores en aprobar el presupuesto, mientras el aval parecía postergarse hasta después de los comicios del 21 marzo, tal y como sucedió cuando Francisco ascendió al mando del Ejecutivo en junio de 1999.

La posición de la fracción arenera contrasta con el discurso del Ejecutivo. La propaganda oficial se jacta de hacer considerables inversiones en beneficio de la población salvadoreña; sin embargo, la bancada oficialista no ha demostrado estar interesada en priorizar la inversión social. En este sentido, se debe hacer una aclaración necesaria para comprender el comportamiento de la inversión pública en los últimos años. Es cierto que ésta ha aumentado; empero, sus niveles no han sido suficientes para hacer frente a las necesidades sociales más importantes de los salvadoreños. Y es que la inversión social debe estar encaminada a la protección de los grupos socioeconómicos más afectados por el estancamiento económico que atraviesa el país, lo cual requiere de un mayor compromiso financiero desde el Estado.

El Presupuesto General de la Nación es un instrumento importante para lograr dinamizar la economía en momentos de estancamiento. Sin embargo, también es preciso reconocer que dicho instrumento también tiene limitaciones y, por tanto, no puede satisfacer las necesidades de política económica en su totalidad. Los cambios en las asignaciones presupuestarias que buscan los partidos de oposición son urgentes. Con ellos se pretende mejorar la salud y la educación de los salvadoreños, fortalecer el trabajo de las municipalidades y también el de algunas de las instituciones del Estado.

Con todo y lo positivo que esto pueda tener, esos cambios no están dirigidos a aquellas unidades del presupuesto que tienen una mejor repercusión en la actividad productiva del país. El área de gestión concerniente al apoyo del desarrollo económico no ha sido objeto de una discusión seria en la Asamblea Legislativa. Es decir, se debería privilegiar el programa de rehabilitación del sector agropecuario, así como el ramo de Agricultura y Ganadería.

Al pasar revista al anteproyecto de Presupuesto queda claro que algunos diputados están privilegiando, al final de cuentas, los gastos en los que incurre el Estado por sobre la inversión productiva. Al momento de referir los cambios que desean hacer las fracciones legislativas opositoras, éstas deberían interesarse por las unidades presupuestarias que potencien más la producción del país, en lugar de favorecer las actividades burocráticas. La búsqueda de mayores niveles de inversión en actividades productivas y los incrementos del gasto en los rubros más importantes para el desarrollo social del país deben gestionarse de una manera cautelosa. Esto significa prestar especial atención al endeudamiento en el cual El Salvador ha venido sumergiéndose en los últimos años. Los cambios en las partidas más importantes del Presupuesto deben hacerse con el cuidado de no alterar el frágil equilibrio macroeconómico del país.

Pero el mes de enero culminaba con una noticia que enloqueció a la prensa nacional y a la misma Policía salvadoreña: la supuesta captura, ocurrida el día 28, del ex presidente de ANDA, Carlos Augusto Perla, quien habría sido detenido en Francia por la Policía de ese país. La Policía salvadoreña se regodeaba del asunto mientras gritaba a los cuatro vientos la captura, en San Salvador, de otras dos personas vinculadas a la red de corrupción montada en la institución autónoma. La noticia de la detención de Perla llegó al día siguiente al país, junto con la noticia de la captura del ex diputado salvadoreño William Martínez, ocurrido el 12 de noviembre pasado, en Panamá. Martínez fue llevado a Estados Unidos, país que le reclamaba por el delito de tráfico de drogas. Pese a que ninguna de las acciones se atribuye a la Policía salvadoreña, ésta no dudó en autoproclamarse como el eficiente genearme de la seguridad pública nacional.

Las capturas del ex alto funcionario corrupto del gobierno actual y de un ex diputado narcotraficante se han considerado un hito muy significativo del esfuerzo por combatir ambos males. Se han

presentado como el comienzo de un esfuerzo sistemático contra la corrupción y el narcotráfico, cuyos primeros frutos serían un éxito rotundo de la Policía salvadoreña. Sin embargo, es demasiado pronto para afirmar si este es, en realidad, el primer fruto de un esfuerzo de largo aliento. Más bien parecen dos capturas extraordinarias. En efecto, poco tuvo que ver la Policía salvadoreña en ambas. El caso de corrupción fue hecho público y perseguido en los tribunales por una razón todavía desconocida. El ex funcionario cayó en desgracia y fue castigado con la persecución de su delito. Cuando el juez dio la orden de captura, el acusado ya había escapado. Fue la Policía internacional, la francesa para ser más exactos, la que lo capturó. El ex diputado narcotraficante tampoco fue capturado por la Policía salvadoreña, sino por un cuerpo de seguridad estadounidense, y en Panamá, de donde fue secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser juzgado.

Está por verse si las autoridades salvadoreñas cumplirán con los requisitos y plazos para extraditar al ex funcionario. El ex diputado deberá cumplir su pena en una cárcel estadounidense. Otros parientes del primero, acusados del mismo delito, no fueron capturados, porque la orden no los incluyó y, como es natural, ya han desaparecido. La Policía salvadoreña tampoco ha capturado a los cómplices del ex diputado, pese a que dice mantenerse en una etapa de investigación. De todas maneras, con tanto despliegue y astucia policial que la propaganda oficial anuncia, es extraño que la policía no capture a tantos homicidas que andan sueltos. Los policías parecen muy feroces con su disfraz, más de escuadra militar antiterrorista que de policía civil, pero son inofensivos a la hora de investigar y perseguir el delito. Han pedido a la policía internacional que se haga cargo de las investigaciones del ex funcionario. Los estadounidenses se encargan del narcotráfico. Los salvadoreños se dedican a cultivar el miedo entre su población.

Más bien, el despliegue publicitario de las dos capturas no tiene otro propósito que inyectar vida a la campaña electoral de ARENA, que tendió a languidecer durante el mes de enero. El mensaje del partido y su candidato se volvió repetitivo, sin avanzar. ARENA se inclinó por la publicidad y ha propuesto "un gran acuerdo nacional", que dice mucho de su ideología. El contenido de este acuerdo se puede resumir en la invitación a trabajar con el candidato "con ganas y libertad". Los desplegados

explican que solo con el trabajo de todos, sin distinciones, ni prejuicios, sin divisiones, ni conflictos, El Salvador será un país de oportunidades y seguro. Es así como lo mejor estaría por venir, es decir, con la continuidad de ARENA en el Poder Ejecutivo. Pero la cuestión socioeconómica está fuera del alcance del partido oficial y su candidato. Ambos están comprometidos de antemano a continuar por el sendero marcado por el poder real del país, el gran capital. Tampoco se han atrevido a tomar distancia del gobierno actual y de los gobiernos anteriores y de sus errores. Sus aires de modernidad y renovación no han llegado tan lejos como para proponer un cambio de rumbo. Si su discurso enfocara los problemas socioeconómicos, la reacción a su favor sería casi inmediata. Pero, en su lugar, han optado por publicitar las capturas de dos delincuentes.

Así, pues, el mes de febrero iniciaba con ARENA en campaña, aprovechando la captura de dos delincuentes para hacer alarde de la "efectividad" policial que tanto añora. No obstante, a cinco días de que la Policía salvadoreña anunciara la captura de Perla, en Francia, nadie se atrevía a localizar el lugar de detención del ex funcionario, así como confirmar su supuesta captura. Las dudas comenzaban a surgir y a desnudar las verdaderas intenciones del gobierno de ARENA y de su Policía. Más tarde, el día 13 de febrero, el desenlace de otro sonado caso golpeó a la opinión pública nacional. Sorprendentemente, el ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Raúl García Prieto, procesado luego de involucrarse en negocios turbios dentro de esa institución, no se presentó a los tribunales donde iba a ser sentenciado a siete años de prisión. García se dio a la fuga tras enterarse por medios aún no determinados sobre su sentencia. Inmediatamente, el ex funcionario pasó a ser parte de la lista de prófugos de la Policía salvadoreña.

Los entendidos en el asunto anunciaron que podía tratarse de un caso de fuga de información lo que facilitó la fuga del ex funcionario. La otra persona procesada en ese caso, el empresario Héctor Cristiani, fue dejado en libertad por un tribunal de Sentencia. Nuevamente, la administración de justicia salvadoreña quedaba en entredicho ante la opinión pública nacional e internacional. Con todo, faltaba otro grave señalamiento. El día 25, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló su informe sobre derechos humanos correspondiente a 2003, en el que, por quinto año consecutivo, señala que "el poder judicial permaneció generalmente

ineficiente y obstaculizado por la corrupción". El documento añade, entre otras cosas, que "la impunidad en el ámbito civil y penal de la ley continúa, particularmente de personas que tenían buenas conexiones políticas, económicas e institucionales".

Pero el mes de febrero ha traído más de las elecciones. La campaña sucia en contra del FMLN y su candidato se agudizó hasta llegar a niveles intolerables. La satanización del proyecto efemelenista se asomaba desde inicios del mes, mientras uno de los matutinos nacionales tildaba en su línea editorial al FMLN como "el diablo en campaña". Mas este partido tampoco jugó limpio. El día 4 de febrero, se le vio manipular la imagen del encuentro entre su candidato y el nuevo embajador estadounidense acreditado en San Salvador, Douglas Barclay, quien hiciera una visita de cortesía a Schafik Handal. Al día siguiente, Barclay reclamó al FMLN, afirmando que "no es apropiado poner una publicación pagada en el periódico" para fines políticos.

Apropiado o no, lo anterior acarreó un coste político al candidato de izquierda, quien días después se viera marginado de una gira del secretario adjunto para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, Roger Noriega, quien se reunió con los demás candidatos en contienda. Noriega, uno de los hombres más radicales de la administración Bush para con América Latina, recibió, el día 6 de febrero, a Antonio Saca, de ARENA; Rafael Machuca, del PCN; y Héctor Silva, de la Coalición. No satisfecho con la exclusión de Handal, Noriega advirtió que "la campaña del FMLN ha enfatizado sus diferencias con nosotros sobre el tema TLC y otros asuntos, y sabemos su historia".

Horas después, Handal acusó al funcionario estadounidense de interferir en la política interna de El Salvador y le replicó al funcionario norteamericano que "quien va a elegir aquí en El Salvador son los salvadoreños y no el señor Noriega". Al calor de las discusiones, un nuevo sondeo de opinión pública ilustraba el paulatino declive del FMLN en las preferencias electorales. El día 17, la Universidad Tecnológica presentó los resultados de una encuesta en los que el partido de oposición obtenía el 31 por ciento de las intenciones de voto, frente al 38.3 por ciento a favor del partido oficial. El sondeo de la UTEC todavía apuntaba a la realización de una segunda ronda electoral.

En ese contexto, la prensa pro derechista hizo caldo de cultivo de una nueva aparición de un Schafik Handal iracundo ante las cámaras. El 19,

mientras se realizaba un acto público en San Salvador, el candidato presidencial del FMLN, cuestionado por un periodista de la *Telecorporación Salvadoreña* (TCS), arremetió en contra de esa empresa, calificándola de ser la "basura" de los medios. Handal lanzó una serie de acusaciones en contra de ese medio y del matutino *El Diario de Hoy*. Ese mismo día, por la noche, TCS difundió un comunicado en el que responsabilizaba al candidato opositor "de poner en peligro la integridad física de nuestro personal con sus comentarios". Al día siguiente, amanecieron las condenas en los medios escritos. El FMLN respondió a las denuncias de TCS diciendo que grupos de extrema derecha preparaban atentados en contra de periodistas para luego agenciar a la izquierda las responsabilidades. El altercado, como era de esperarse, despertó un nuevo cuestionamiento en contra del FMLN sobre su tolerancia respecto de los medios informativos salvadoreños.

A la visita de Noriega y antichavistas venezolanos se sumaron otras personalidades. El día 22, el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, de visita en el país para mostrar su apoyo al FMLN, recibió una distinción de la municipalidad de San Salvador, misma que le declaró "huésped de honor". Cárdenas, entrevistado por *La Prensa Gráfica*, habló de la relación oficial entre el FMLN y Estados Unidos: "no es una nación monolítica y cerrada. En Estados Unidos hay muchos amigos del FMLN y no van a intervenir en lo que no deben", comentó el visitante mexicano. Simultáneamente, la hija del presidente cubano Fidel Castro, Alina Fernández, arribaba a El Salvador para alertar sobre la "remontada brutal del castrismo en Latinoamérica", personificada en el país por Handal y el FMLN, a quienes no dudó en tildar de mentirosos. "No se puede decir que esto sea una gloria. Lo que yo sí puedo venir a decir es lo que puede pasar si ustedes hacen un retroceso en la historia", aseveró la cubana radicada en Miami, Estados Unidos, entrevistada por la prensa.

La visita de esas personalidades ha sido, sobre todo para la derecha, motivo para alertar sobre la inminente debacle que se cerniría sobre el país, si el FMLN se hace del Poder Ejecutivo. ARENA escucha con atención a venezolanos y cubanos que se consideran víctimas de los regímenes que gobiernan sus respectivas naciones. Estos destacados exponentes de la oposición venezolana y cubana han sido traídos para advertir que lo mismo pasaría en El Salvador, si ganara el FMLN. Entre ad-

vertencias y lamentos, han contribuido a fomentar el miedo y a aumentar la incertidumbre entre sus anfitriones. La queja más repetida es que los han despojado de su libertad y el temor mayor de los salvadoreños crédulos es perder esa misma libertad.

Sin embargo, la intolerancia de ARENA es también una negación directa de la libertad. Al soltar sus cuadrillas de militantes para intimidar al elector, destrozando la propaganda del adversario, agredirlo e incluso destruir su propiedad son muy similares a las que organizan los regímenes que tanto aborrecen estos amantes de la libertad. Si el FMLN fuera una amenaza para la libertad, tal como ellos aseguran, ARENA también lo es y tal vez lo sea más, porque controla el aparato del Estado. Pero la prensa nacional ha ayudado a ARENA a tapar esa realidad. Pese a que los activistas de los dos principales institutos políticos se han agredido, la prensa tiene a priorizar las versiones del partido oficial.

Pero mantener en primera línea los embates partidistas no ha sido un buen negocio para los propietarios de los grandes medios del país. El alboroto armado en torno a la violencia proveniente de los simpatizantes de los partidos políticos llegó a poner en peligro la fabricada agenda de la violencia de las maras, un tema que no deben descuidar los empleados de las grandes empresas mediáticas, so pena de agotar un asunto que llevó a ARENA a posicionarse entre la población como el partido que combatirá la delincuencia con mayor dureza en el país. Además, otros temas relevantes como la captura de Carlos Perla, el insólito escape de Raúl García Prieto, antes de ser condenado, y la propuesta del Ejecutivo para volver permanente la Ley Antimaras debían ser cubiertos. En efecto, la guerra contras las maras ha cobrado nuevos aires cuando parecía que se agotaba por sus magros resultados. El presidente Flores y sus ministros han vuelto a utilizar un tema ya bastante manoseado en momentos en que Casa Presidencial anuncia sus éxitos a lo largo de los cinco años de gestión de aquél.

Como quiera que sea, la violencia protagonizada por activistas de los partidos políticos en contienda encuentra un poderoso acicate en los discursos pronunciados por los candidatos presidenciales y en los campos pagados que a diario aparecen en los espacios escritos, radiales y televisivos. Uno de los más virulentos manipula las declaraciones del candidato del FMLN, Schafik Handal, quien en el pasado reconoció la autoría del FMLN

armado en varios secuestros. Sacadas de contexto, las palabras del líder efemelenista son utilizadas para desprestigiar, a todas luces, al partido que le postula a la presidencia. Esa imagen va emparejada con el discurso anticomunista del candidato oficial y de los principales jerarcas areneros, cuyo propósito es sembrar el miedo entre la población ante un posible triunfo electoral del FMLN. Pero olvidan mencionar los financistas de esa campaña sucia los vínculos que unían a los escuadrones de la muerte con la máxima figura histórica del partido ARENA, a quien veneran como prototipo de patriota.

En ese sentido, resultan hipócritas los llamados del presidente del Ejecutivo y del mismo candidato oficial, exigiendo del FMLN un comportamiento acorde con los principios democráticos. ARENA culpa al FMLN por sembrar el miedo entre la población, pero es ella misma quien lo genera mediante esas campañas sucias. No es de extrañar que muchas agresiones sufridas por activistas del FMLN no hayan encontrado cabida en la prensa pro oficialista. Tampoco debe causar extrañeza que los propietarios de los grandes medios hayan tolerado la propaganda sucia en sus espacios, aunque provengan de la peor calaña antidemocrática. Y es que el sagrado principio de la libertad de expresión puede tolerarlo todo, aunque tales discursos alimenten los odios y las fobias todavía fuertemente arraigados entre los grupos de poder de derecha.

La propaganda oficial, al igual que en el mes de enero, tomó los cauces de la lucha antimaras del presidente Flores. Así, el 1 de febrero, coincidiendo con el Día de la Policía Nacional Civil, el director del cuerpo policial, Ricardo Meneses, aseguró que los delitos cometidos por pandilleros en el mes de enero se han reducido en un 32 por ciento, respecto del mismo período de 2003. Meneses aseguró que la disminución se debe a la ejecución del Plan Mano Dura. En ese ámbito de júbilo presidencial, el día 16, el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que pretende dar carácter permanente a la normativa antimaras, incluyendo medidas más duras en contra de los pandilleros. La nueva ley constriñe a los jueces, quienes no podrían reemplazar las penas ni otorgar el perdón judicial o la libertad condicional.

Las reacciones de los jueces no se hicieron esperar. Aída Santos de Escobar, jueza de Ejecución de Medidas, consideró que la nueva ley violaba preceptos constitucionales como el principio de

igualdad. Santos no dudó en sostener que Flores se entromete con el Órgano Judicial. Juan José Daboub, ministro de Hacienda e integrante de la comisión antimaras, exhortó al Órgano Judicial “a que no confunda la independencia con la indiferencia de lo que les sucede a las personas”. En ese sentido, el 17, representantes de cuatro asociaciones de jueces dieron lectura pública a un comunicado en el que tildaron de injerencia las declaraciones vertidas por Flores en las que increpa a los jueces el no aplicar la Ley Antimaras y los califica de indiferentes ante el dolor de los salvadoreños. Los jueces expresaron que “no es capricho de ellos el no aplicar la Ley Antimaras, sino que el choque con la Constitución les impide hacerlo”.

Al cierre del mes, el presidente Flores bordeó los límites que le permite su investidura y arremetió nuevamente en contra de la oposición, tomando partido por ARENA al vincular al FMLN con pandilleros ansiosos de armas. “He recibido informes, de parte de la Policía Nacional Civil, de que algunos mareros estarían buscando posesionarse de armas militares, y queremos ver si hay un posible nexa entre violencia electoral y armas trasladadas a los mareros”, dijo el mandatario, el día 25. Tales declaraciones no cayeron en gracia en diferentes sectores de la sociedad, que leen en los discursos del presidente de la República —representante de todos los salvadoreños— un marcado apoyo hacia ARENA y su candidato en una campaña electoral en la que no debería, al menos públicamente, mostrar sus preferencias.

Así las cosas, el mes de febrero marcó la recta final de los preparativos de las elecciones del 21 de marzo, en el que otros temas de interés nacional fueron prácticamente borrados de la agenda nacional. Algunos, como la salubridad de los salvadoreños ante las epidemias y la negociación política del CAFTA, apenas y alcanzaron rebasar el tamiz de la prensa nacional, lo cual, en connivencia con los círculos oficiales, ha trazado la agenda del país desde que el partido en el gobierno se hizo del despacho de Casa Presidencial.

El primer punto que logró colarse, el de la salubridad de los salvadoreños, apareció en la agenda nacional debido a la epidemia de rotavirus que ha atravesado la vecina Guatemala desde el inicio del año y que mantuvo en alerta a las autoridades sanitarias salvadoreñas, ante la amenaza de una propagación en el territorio nacional. Y la alerta no ha sido gratuita. Hasta mediados de febrero, había en



Santa Ana 40 pacientes internados en el Hospital de ese municipio con síntomas de rotavirus, cinco de ellos provenientes del país vecino. Las autoridades de Salud dijeron ejecutar una campaña de prevención en la zona fronteriza. El día 16, el Ministerio de Salud decretó alerta preventiva debido a la confirmación de 44 casos de rotavirus en el país, la mayoría en la zona occidental, fronteriza con Guatemala. Hasta el día 19, el índice de positividad había aumentado del 35 por ciento, en 2003, al 42 por ciento, en el presente año. El 20, la cartera de Salud confirmaba 111 casos en todo el territorio nacional, superando las estadísticas del 2003.

En el marco del segundo punto en cuestión, a saber, la fase política del TLC con Estados Unidos, el día 4 dio inicio un foro en el que el sector privado centroamericano discutiría los retos y las oportunidades de la vigencia del CAFTA. Al evento asistieron Roger Noriega, Francisco Flores y Grant Aldonas, subsecretario de comercio de Estados Unidos, entre otros invitados. El 20 de febrero, los sectores oficiales salvadoreños recibieron un espaldarazo internacional cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, notificó al Congreso de su país la intención de firmar el CAFTA, sorteando el escepticismo de sindicatos y otros senadores y congresistas, sobre todo demócratas. “Nuestros socios han realizado progresos considerables para transformarse en países democráticos”, justificó el mandatario estadounidense.

De acuerdo con la prensa nacional, tras la notificación, el Congreso tendrá noventa días para estudiar el texto del acuerdo y verificar si cumple con los requisitos estipulados en la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés). Según la investigación de un rotativo nacional, las compañías que cabildan por el CAFTA en Estados Unidos cobrarían al país, cada una, unos 44 mil dólares mensuales. Así, pues, pese a que los representantes comerciales centroamericanos y sus pares norteamericanos ya rubricaron el acuerdo, el TLC entre Centroamérica y la primera potencia económica mundial aún no ha terminado de atar los muchos cabos sueltos que tiene desde su concepción.

El júbilo de los gobernantes centroamericanos está, en cierta medida, justificado: han logrado sortear el obstáculo que representó la oposición de la sociedad civil, preocupada por los impactos negativos que la concreción del CAFTA tendrá en las repúblicas del Istmo. Este éxito se ha logrado en

virtud de una negociación diseñada para garantizar un total hermetismo de cara a la opinión pública, lo que hace del CAFTA un tratado impermeable a las críticas. No por su ausencia de fallas, sino por la ausencia de información. Queda por superar la ratificación del tratado por parte del poder legislativo en todos los países participantes.

Dada la composición de la mayoría de los legislativos centroamericanos —con una manifiesta predominancia de la derecha, salvo los casos de El Salvador y Nicaragua, donde la oposición no tiene la mayoría, aunque sí un relativo nivel de incidencia—, lo que cabe esperar es que, a lo sumo, los congresos sean el marco de encendidos debates sobre la conveniencia del CAFTA, aunque al final éste termine ratificándose en los términos pactados con los negociadores de Estados Unidos. Como quiera que sea, la fase de cabildos políticos tendrá un alto costo económico para las arcas estatales centroamericanas, cuyos gobiernos son inexpertos en tratados de la envergadura del CAFTA.

De la negociación del TLC a la campaña proselitista no hay más que un paso. No obstante, más allá de la publicidad gubernamental sobre los beneficios del CAFTA, ni el partido oficial ni las fuerzas opositoras han presentado, en el contexto de la campaña, un verdadero programa de gobierno que indique cómo se abordarán los problemas del desempleo estructural, el déficit comercial, la deuda externa, la deuda pública y otros tantos. Parece ser que la publicidad, y no tanto las ideas y el análisis, es el campo privilegiado de esta campaña. En cierta medida, los asertos falaces han caracterizado la actividad proselitista de los partidos en contienda. Muchas de las personas adheridas al pensamiento de la derecha consideran que ahora más que nunca se debe estar alerta ante las asechanzas de la izquierda. Para ellos, si bien el gobierno en turno ha tenido “leves desaciertos en la política social”, hay que darle una nueva oportunidad, por lo que es necesario que los salvadoreños aprendan a esperar. Afirman que todo proyecto ambicioso, como el de sacar adelante a una nación y llevar mejores condiciones de vida para sus habitantes, son proyectos de largo plazo. Por tanto, en el discurso de los partidarios del oficialismo, lo mejor es apostarle al desarrollo y esperar, ya que “lo mejor está por venir”.

Así, el 2004 ha iniciado con la etapa más decisiva de la campaña electoral. Los salvadoreños cuentan desde enero con un mapa electoral sufi-

cientemente definido. Tres partidos políticos y una coalición se disputan la presidencia de la República. Un marcado antagonismo entre las fuerzas extremas, ARENA y el FMLN, es quizás la principal característica del sistema de partidos salvadoreño. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aparece como una entidad debilitada por su misma estructura interna, pero garantiza, en lo fundamental, la transparencia del proceso electoral. La constante hasta el momento ha sido una pobre discusión sobre los problemas más gruesos de la sociedad (pobreza, desempleo, inseguridad, etc.) y más bien se ha privilegiado el juego de la imagen pública de los candidatos.

Temas importantes como la salud, la educación, la conducción económica y la seguridad pública han salido a la palestra de la discusión, gracias al papel de los medios, pero ni éstos ni los candidatos han traspasado la superficialidad de las promesas vacías y aventuradas. ARENA es el partido que más ha convencido a los salvadoreños, de acuerdo con los últimos sondeos de opinión pública. El FMLN le sigue de cerca, aunque habría frenado su tendencia de crecimiento —hasta retroceder, según los sondeos menos complacientes con la izquierda—, y los partidos PCN y la coalición CDU-PDC tendrán que hacer un ingente esfuerzo para poder alcanzar el mínimo requerido para su supervivencia política.

El nuevo ascenso de ARENA tiene explicación. El anuncio de parte del candidato arenero en términos de utilizar una “super mano dura” en contra de los delincuentes no es más que la ratificación de las campañas estatales represivas profusamente utilizadas en América Latina desde larga data, pero tan eficaces ante sociedades marcadas por el temor a la delincuencia. Los gobernantes vecinos de América Central parecen hablar ese mismo idioma al suscribir un acuerdo que dice perseguir a los pandilleros en toda la región. Honduras ya contaba con una Ley Antimaras antes que los diputados salvadoreños aprobaran la moción de Francisco Flores el año pasado. Enrique Bolaños, presidente de Nicaragua, y el nuevo gobernante guatemalteco, Óscar Berger, han anunciado su apoyo a los planes hondureño y salvadoreño. El ascenso de Berger al Ejecutivo guatemalteco y sus simpatías marcadamente expresadas ante el presidente Flores y el candidato arenero, Antonio Saca, constituyen un mensaje de anunciados apoyos oficiales a un eventual nuevo gobierno de ARENA. El expreso apoyo

de Berger, Maduro y Bolaños a la candidatura de Flores para la OEA es otra muestra de la sintonía oficial entre las derechas centroamericanas.

El partido de gobierno y su candidato han contado también con el apoyo de los grandes empresarios del país y de la fundación que éstos financian. En efecto, Antonio Saca no ha necesitado elaborar un plan de gobierno, pues la ANEP y FUSADES lo han hecho por él. Ambas entidades —amparadas en su gran trascendencia nacional y regional— han elaborado sus planes de nación, coincidiendo sobremanera con la propuesta arenera.

Lo que venga en los días que nos separan de las elecciones de marzo es bastante predecible. Por un lado, el Ejecutivo irá a la caza del apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa para la ratificación del CAFTA, que recién se ha firmado en diciembre. En esa tarea cuenta con el apoyo anticipado de la fracción arenera en el Parlamento y del gran empresariado nacional. El Ejecutivo también continuará incentivando el crecimiento de las exportaciones de maquila —a pesar de ser un sector que, a partir de 2005, experimentará muchas dificultades luego que la OMC permita la libre circulación de productos textiles chinos en el mundo— y el envío de las remesas desde el exterior.

Al mismo tiempo, cabe esperar una intensa campaña electoral en el marco de la carrera por la presidencia, en donde temas como la delincuencia y el desempleo serán explotados al máximo por las principales fuerzas políticas en liza. La Ley Antimaras —que al parecer ha terminado su ciclo sin mayores resultados— ha sido un anticipo de ello. No se descartan nuevos enfrentamientos entre los poderes del Estado, en torno a asuntos vitales como la descentralización del Estado mismo, la reforma del sistema judicial, la ratificación del CAFTA y la condonación de las deudas de los agricultores, entre otros. Ya ha iniciado el año y la Asamblea no ha logrado concertar la propuesta de la cartera de Hacienda para aprobar el presupuesto general de la nación correspondiente a 2004.

No cabe duda que la polarización de la campaña no ha aportado mucho a la madurez del sistema político del país, ni mucho menos ha permitido abordar los temas que más preocupan a los salvadoreños. En este sentido, se puede sostener que la tercera campaña presidencial, desde la firma de los acuerdos de paz, aparte del mayor grado de violencia registrado, no se ha diferenciado de las

campañas anteriores. Los partidos siguen sin levantar cabeza. Quizá, a estas alturas, hay que interrogarse sobre cuál será el mejor mecanismo para quebrantar, en las próximas elecciones, el protagonismo malsano del que gozan ARENA y el FMLN.

Lo que va de la campaña —a escasos días de las elecciones— ha dicho del grado de intolerancia de los partidos y sus candidatos y de su escaso interés por abordar los problemas más urgentes de la sociedad; pero también ha hablado de la inconsecuencia de la derecha salvadoreña —esa derecha aglutinada en ARENA, cuyos intereses son defendidos a capa y espada por los grandes medios de comunicación del país—. En materia económica, su incongruencia con los principios del mercado ha sido puesta de manifiesto una y otra vez, desde que ARENA se hizo del control del Ejecutivo, en 1989. Siempre que esas reglas no han favorecido a sus grupos más influyentes, éstos las han torcido a su conveniencia, haciendo gala de prácticas desleales y monopolistas, o sirviéndose del aparato gubernamental para sacar adelante sus negocios. Por supuesto, en su discurso, los temas recurrentes son la defensa de las libertades económicas para todos, la competencia sin trabas y la satanización de cualquier tipo de intervencionismo estatal.

La derecha salvadoreña también es inconsecuente con los compromisos políticos que asumió en 1992. En aquel momento, no solo aceptó someterse a las reglas de la democracia electoral, sino competir por el control del aparato estatal con la principal fuerza de oposición surgida desde ese entonces, es decir, el FMLN. Este último, para ser aceptado como un integrante más del sistema político, tuvo que convertirse en un partido legalmente inscrito, dispuesto también a competir electoralmente por una cuota de poder. Con frecuencia, la misma derecha olvida —sobre todo, sus voceros más fanáticos y proclives al olvido histórico— que fue un gobierno de ARENA el que firmó unos acuerdos de paz con el FMLN y que, en virtud de esos acuerdos, la agrupación de izquierda se conformó en un partido con iguales derechos que el resto de partidos existentes legalmente en El Salvador. Asimismo, aceptar las reglas de la competencia electoral y la legitimidad del FMLN como un adversario político, suponía para ARENA asumir un aspecto sustantivo de la democracia electoral: la alternabilidad en el ejercicio del poder gubernamental.

Aparte de lo anterior, también se estaban dando por aceptadas otras cosas, reconocidas en los

acuerdos de paz y en el informe de la Comisión de la Verdad: que en la guerra habían participado dos bandos, que ambos bandos habían provocado destrucción y muerte, y que, en el conflicto armado, el Estado salvadoreño había fallado en su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de los salvadoreños, víctimas de los grupos paramilitares de derecha, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada. Todo esto fue aceptado por ARENA, pues fue Alfredo Cristiani —prohombre del partido en esos momentos— quien suscribió, a nombre del gobierno salvadoreño, los acuerdos de paz. Cualquiera que tenga los mínimos conocimientos acerca de la historia reciente de El Salvador debería ser consciente de lo que se acaba de reseñar.

La campaña electoral de ARENA —secundada por sus comparsas en los grandes medios de comunicación— es la prueba fehaciente de lo dicho anteriormente. La propaganda sucia y los ataques arteros han sido la norma. No se ha dudado en achacar al FMLN la destrucción provocada por éste en la guerra, olvidando que la Fuerza Armada destruyó cultivos y asesinó a campesinos en Morazán, Chalatenango y Guazapa. Se le ha imputado a Schafik Handal el ser un secuestrador confeso, pero los acusadores han olvidado a los militares involucrados en la misma actividad o de figuras de ARENA que en los primeros años de la década de los ochenta usaban la Asamblea Legislativa para planear atrocidades —como desapariciones y asesinatos— en contra de sus opositores, acusados indiscriminadamente de comunistas y enemigos de la patria.

Cuando ARENA deslegitima al FMLN y a su candidato, cuando alimenta temores en la población para que no vote por ese partido, cuando le atribuye al partido de izquierda, sesgadamente, la responsabilidad exclusiva en la guerra civil, no hace sino violentar esas reglas de juego. Cuando los grandes medios de comunicación se suman a la campaña sucia de ARENA, contribuyen a socavar de raíz la posibilidad de que exista en el país un esquema político mínimamente democrático, en el cual todos los actores se sometan, por igual, a las reglas de juego establecidas.

La derecha salvadoreña no quiere aceptar, de una vez por todas, que las reglas democráticas deben ser cumplidas y defendidas siempre, no solo cuando le son favorables. No someterse a esa exigencia significa traicionar a la democracia y sem-

brar la inestabilidad en el país. Cuando los grandes medios de comunicación se prestan a esta traición, se denigran y pervierten, por más que se rasguen las vestiduras diciendo que lo único que ellos hacen es defender la libertad de información y de expresión. Hasta ahora, ARENA y las grandes empresas mediáticas le han jugado mal no tanto al FMLN, sino al país. Sus ataques arteros al FMLN vulneran también los cimientos democráticos establecidos en 1992. En algún momento, esas empresas tendrán que rendirle cuentas a los salvadoreños por su parcialidad a favor de la derecha, así como por sus trampas y su manipulación de la realidad.

Como quiera que esto sea, El Salvador se halla en el umbral de unas elecciones presidenciales que dicen mucho del avance de la cultura política de los salvadoreños, luego de que éstos firmaron la

paz. De ello se desprende que doce años no han sido suficientes para cimentar realmente las bases de una sociedad democrática que dirima sus diferencias sobre los criterios de la tolerancia y del diálogo. A las puertas de un evento electoral, la derecha ha mostrado ofrecer más de lo mismo, pese al discurso e imagen renovados de su candidato; el FMLN muestra no estar preparado lo suficiente como para llevar las riendas del país en un escenario poco menos que inestable. Así las cosas, los salvadoreños deberán elegir presidente y vicepresidente en un escenario que no era el más esperado por ellos; un escenario que, en vez de suscitar la discusión sobre la realidad nacional y las posibles soluciones a sus más urgentes problemas, ha tomado los cauces de la intolerancia, la violencia, la manipulación, la intimidación y el juego sucio.

